

INTERONGO RECURSO DE APELACION

SR. JUEZ CIVIL Y COMERCIAL DE LA I NOM

Ref: "URUEÑA SONIA EVANGELINA C/ LOPEZ
EDUARDO RAUL Y OTROS S/ DAÑOS Y
PERJUICIOS –Expdte. n° 176/19

SEBASTIAN ALBERTO GOMEZ GUCHEA, apoderado del
demandado AG NAUM S.A.respetuosamente ante V.S. me presento y digo:

1.- En legales tiempo y forma, cumpliendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo por el presente escrito a interponer formar recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en fecha 27/12/2023, solicitando se haga lugar al mismo, por los fundamentos de hecho y de derecho que se exponen a continuación, con expresa imposición de costas:

2.- La resolución atacada por esta vía dispone, en su parte pertinente "RESUELVO: I.-NO HACER LUGAR a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el letrado Sebastián Alberto Gómez Gucheá como apoderado de la demandada AG NAUM S.A., conforme lo considerado. II.-NO HACER LUGAR a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el letrado Tomás Palacio como apoderado de Ford Argentina S.C.A., según lo considerado.III.- HACER LUGAR a la demanda por daños y perjuicios entablada por la Sra. SONIA EVANGELINA URUEÑA, DNI 31.765.791, en contra del Sr. EDUARDO RAÚL LÓPEZ, DNI 35.257.624; AG NAUM S.A. y FORD ARGENTINA S.C.A.IV.-Por lo considerado, condeno a las demandadas a abonar la suma de \$2.245.698 (pesos dos millones doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y ocho) a la actora, con más los intereses correspondientes, conforme a lo establecido. Dicha suma deberá ser abonada en el plazo de 10 días de quedar firme la presente resolución. V.-COSTAS se imponen a los demandados vencidos, de acuerdo a lo considerado.VI.-FIJAR LA BASE REGULATORIA en la suma de \$3.192.694 (pesos tres millones ciento noventa

y dos mil seiscientos noventa y cuatro). REGULAR HONORARIOS: Por el proceso principal, al DR. ALBERTO DANIEL MORENO la suma de \$446.977 (pesos cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos setenta y siete); al DR. SEBASTIAN ALBERTO GÓMEZ GUCHEA la suma de \$395.895 (pesos trescientos noventa y cinco mil ochocientos noventa y cinco) y al DR. TOMÁS PALACIO la suma de \$395.895 (pesos trescientos noventa y cinco mil ochocientos noventa y cinco). Por la pericia mecánica al ING. PABLO DANIEL IMPELLIZZERE la suma de \$94.299 (pesos noventa y cuatro mil doscientos noventa y nueve). En todos los casos deberá adicionarse el IVA en caso que corresponda, conforme lo considerado. Asimismo, dichas sumas deberán ser abonadas en el plazo de 10 días de quedar firme la presente resolución.VII.-NOTIFÍQUESE de conformidad al art. 35 Ley 6059..VIII.-NOTIFÍQUESE en el domicilio real al demandado EDUARDO RAÚL LÓPEZ con arreglo al art. 268 del CPCCT.

3.- AGRAVIOS.

Veamos:

1.- Primer agravio: Sentencia arbitraria por carecer de fundamentos facticos y jurídicos razonables.-

En primer lugar, cabe señalar que la resolución atacada por esta vía resulta absolutamente arbitraria por no ser una derivación razonable de la aplicación de las normas jurídicas de fondo aplicables al caso concreto (art 3 CCYC).-

Ello es así por cuanto la SR JUEZ a quo, yerra en el análisis de los antecedentes facticos a partir de los cuales efectúa una errónea aplicación de las normas jurídicas, sin realizar una adecuada valoración de la totalidad de la pruebas producidas en el caso, omitiendo el análisis de prueba esencial para la resolución justa del pleito.-

En autos, no se discute sobre la deficiencia de la reparación realizada. Ello es así porque desde la contestación de la demanda, mi mandante siempre afirmó que JAMAS realizo la reparación. Por lo tanto no puede discutir la calidad de una reparación que mi mandante nunca efectuó.-

En tal sentido, se agravia mi mandante por cuanto la sentencia considera que existió una relación de consumo con la actora, lo cual no solamente es errado sino que tampoco fue acreditado en autos por la SRA URUEÑA.

Por ello se agravia mi mandante cuando la sentenciante sostiene que "estamos en presencia de una demanda de daños y perjuicios en la que se le

atribuye a los accionados responsabilidad civil por el hecho del dependiente (1753 del CCCN) de uno de ellos, resulta también aplicable al caso el régimen protectorio consumeril.

Ello así en tanto la actora reclama los daños y perjuicios derivados de un contrato que -según afirma- se habría perfeccionado con la concesionaria demandada (encargada del servicio de posventa de la marca Ford Argentina), a través de su dependiente representante (Sr. López) y cuyo objetivo era la reparación de un vehículo de propiedad de la Sra. Urueña.

La contratación así descripta, de ser acreditada, configura un contrato de consumo en el que la actora es consumidora y la concesionaria y la fabricante revisten el carácter de proveedores, conforme surge el art. 2 de la Ley 24.240."

La sentenciante, intenta en forma errónea, subsumir la presente demanda en el ámbito de aplicación de la LDC cuando en realidad no le son aplicables las normas de derecho consumeril.

La relación de consumo es una especie de la relación jurídica, de raigambre constitucional consagrada en su art. 42 y que está integrada por los elementos subjetivos, objetivos y la causa final que le brinda su razón de ser. En efecto, en el elemento subjetivo se advierten dos polos o términos de la relación jurídica de consumo, en la cual encontramos al "consumidor" (SANTARELLI, Fulvio G., "Capítulo I - Disposiciones generales", en PICASSO, Sebastián y VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A. (dirs.), Ley de defensa del consumidor. Comentada y anotada, La Ley, Bs. As., 2009, t. I, pág. 28) y al "proveedor de bienes o servicios". Ambos términos admiten diversas clasificaciones -doctrinarias y legales- como también diferentes categorías, que no viene al caso referirnos en esta oportunidad.

Luego el elemento objetivo o material está integrado por aquellas operaciones que recaen sobre determinados bienes o actividades, que en la disciplina consumerista se denominan como "productos o servicios". Por último, pero no menos importante, resulta fundamental el destino final para el consumidor, su grupo familiar o social, en cuanto último eslabón de la cadena de producción y comercialización de bienes o servicios (FARINA, Juan M., Defensa del consumidor y

del usuario. Comentario exegético de la ley 24.240 con las reformas de la ley 26.361, 4ª edición actualizada y ampliada, Astrea, Bs. As., 2008, pág. 45 y sig.).

Entonces, para que resulte aplicable el régimen protectorio - aunque parezca una obviedad- se requiere el perfeccionamiento de una relación de consumo tanto en su ámbito subjetivo, objetivo y de causa final; de lo contrario, no será aplicable rigiéndose la relación jurídica por otros ordenamientos jurídicos generales o particulares como también microsistemas.

Por lo tanto, desde el punto de vista subjetivo, debe haber un consumidor (art. 1, LDC; art. 1092 CCyC) y un proveedor (art. 2, LDC; art. 1093 CCyC). Desde el punto de vista objetivo, la normativa consumerista ha extendido sus límites atrapando mayores adquisiciones de bienes y servicios, sean o no contractuales, con lo cual podemos afirmar que casi todas están incluidas dentro de su ámbito de aplicación, ya sea que se celebren a título oneroso o gratuito. Sin embargo, ello no es suficiente porque pueden perfeccionarse, en el caso, tanto el ámbito subjetivo como objetivo, pero no cumplirse el destino final, en virtud que el adquirente no agota la cadena de producción y comercialización utilizando el producto, por ejemplo, como un medio para la generación de lucro: entonces tampoco habrá relación de consumo. La causa final, según nuestro criterio, es estrictamente económica (TARTUCE, Flávio, “Direito material” en TARTUCE, Flávio - NEVES, Daniel A. A., Manual de direito do consumidor. Direito material e processual, 3ª edição, São Paulo, Método, 2014, pág. 74), en cuanto el consumidor debe ser el último eslabón de la denominada cadena de producción, distribución y comercialización de bienes o servicios.

Entonces, para ser considerado consumidor, el contratante debe actuar como destinatario final, es decir, el producto o servicio adquirido no puede reinsertarse en el mercado incorporándose a nuevo proceso de elaboración o prestación, debiendo emplearse para un uso privado, familiar o social

Dicha afirmación encuentra su fundamento en que la unidad no fue adquirida por la actora como "destinatario final", tal como lo exige la norma para ser considerado consumidor. Ello es así por cuanto la categoría de consumidor se encuentra organizada desde la perspectiva económica de consumo. Esto significa que

hay acto de consumo cuando el producto o servicio es retirado del mercado, agotándose su valor económico, o lo que es igual situándolo fuera de la cadena de valor, pues no se lo vuelve a reinsertar en el proceso de elaboración de bienes o de prestación de servicios. Esta idea es complementaria con la exigencia de que el bien sea utilizado para uso familiar o social, lo cual excluye el destino a una actividad empresarial.

La sentenciante pretende sustentar su decisorio en el supuesto carácter de “consumidor” de la actora. Sin embargo, en autos no se acreditó nada al respecto. Por el contrario, expresamente manifestó su condición que la "unidad constituye su herramienta de trabajo" por lo que claramente, al estar destinada su unidad a su actividad productiva, la actora queda excluido del paraguas protectorio de la LDC.

En tal sentido, la sentenciante no subsumió, concreta y específicamente, los presupuestos de aplicación del régimen de defensa del consumidor en los hechos subyacentes al presente proceso. La supuesta concurrencia de dichos extremos, consecuentemente, tampoco fue probada ni se ofreció hacerlo.

Por tanto, la SRA JUEZ A QUO, con absoluto dogmatismo, actuó directamente por vía presuncional.

Recuérdese que nuestro ordenamiento jurídico no establece presunción alguna respecto del supuesto carácter de “consumidor” de quienes inicien reclamos invocando.

Las afirmaciones vertidas carecen de fundamento factico y jurídico por cuanto conforme reiterada y pacífica jurisprudencia **“Para solicitar la tutela jurisdiccional sobre la base de la Ley de Defensa del Consumidor debe argumentarse y probarse que las circunstancias fácticas caen dentro de la órbita de su aplicación, ya que la mera invocación de las respectivas normas resulta insuficiente a tal fin. Ello es así porque tal régimen normativo, aunque existen múltiples normas encaminadas a proteger a consumidores y usuarios en general, articula una serie de disposiciones destinadas a tutelar de modo específico a los consumidores y usuarios que considera dignos de tal protección (Sistema de Jurisprudencia Civil; Código Civil Legislación Complementaria; T.V.; Marcelo J. López Mesa; C.Civ. Com. Quilmes, sala 2,**

13/12/2002, “Gimenez Tizzano Jorge vs. Soto Claudia”, en Juba sum. B2951146). Se requiere una tarea interpretativa concreta, previa e insoslayable: determinar si en el específico caso litigioso media relación de consumo, toda vez que no es pertinente una declaración genérica y abstracta que prescinda, de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la relación de consumo a las que se refiere el art. 36 LDC (C.Civ y Com. de Azul, sala II, 19/05/11; Banco de la Provincia de Buenos Aires c. Rodríguez, Valerio e.; LA LEY Bs. As., 2011-532 citado por Rodríguez J. y otro ob. cit.). En esta hermenéutica, entendemos que no resulta suficiente valerse de presunciones a partir solamente de las características del proveedor de servicios financieros del actor, para determinar la existencia de una relación de consumo. Deben concurrir indicios serios que permitan determinarla. CAMARA CIVIL EN DOC. Y LOCACIONES Y FAMILIA Y SUCES. - CONCE - Sala en lo Civil en Documentos y Locaciones S/ COBRO EJECUTIVO Nro. Sent: 9 Fecha Sentencia 08/03/2018. DRES SANTANA ALVARADO- AGUILAR DE LARRY

Note EXCMA CAMARA que ni siquiera la actora invoco el paraguas protectorio de la LDC pero la SRA JUEZ A QUO, en exceso del ámbito en el cual quedo trabada la litis, le otorga una protección que no fue solicitada y menos aun acreditada.-

Tal nuestro primer agravio.-

2.-Agravia a mi mandante que la resolución dictada por la SRA JUEZ A QUO resuelve el rechazo de la defensa de falta de acción interpuesta por mi mandante por la mera aplicación del régimen protectorio de la LDC.-

El art 1753 de nuestro Codigo civil y comercial dispone que "El principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas"

La defensa impetrada, que no fue analizada con la profundidad que la situacion amerita, encuentra su fundamento en que el presente es un conflicto ocurrido entre la actora y el SR LOPEZ, quien en el caso sub-examen no actuó en ejercicio ni en ocasión de sus funciones.-

Dicha afirmación encuentra se acredita con las manifestaciones vertidas por el SR LOPEZ quien expresamente manifestó en el acta notarial adjuntada

por la actora que "el chapista que el contrato realizo mal los trabajos y que él se hará cargo de lo que falte hacer o se deba hacer de nuevo" sino también con el testimonio brindado por el SR EZEQUIEL FARALLE durante la segunda audiencia llevada a cabo en este juicio.-

Dicho testimonio tampoco fue analizado por la SRA JUEZ A QUO en forma adecuada. Solamente rescato, en forma parcial, los dichos necesarios para hacer lugar a la demanda.-

Pero veamos. Incluso cuando la escribana actuante, a pedido de la requirente le pregunto si el trabajo realizado tenia la garantía del concesionario, el SR LOPEZ respondió que no, que fue un arreglo que hizo con el SR JOSE OSVALDO SANCHEZ (novio de la actora) por fuera de la firma, con un chapista particular y que la empresa no tiene nada que ver"

Con esto queda acreditado que mi mandante no recibió la unidad en el taller y menos aun contrato a un taller mecánico extraño al concesionario para realizar los trabajos.- JAMAS SE PROBO EN AUTOS QUE LA UNIDAD HAYA INGRESADO AL TALLER.

La SRA JUEZ A QUO pretende tener por acreditado el ingreso con la mera emisión del presupuesto pero del testimonio del SR FARALLE surge que cuando las unidades ingresan al taller por reparaciones, esa circunstancia se acredita con documentación fehaciente, es decir hay una orden de reparación que acredita el ingreso al taller, la cual no fue presentada por la actora.-

De esta manera, en caso que analizamos, no resulta aplicable el art. 1753 como erróneamente pretende la sentenciante, por cuanto el daño supuestamente sufrido por la actora no ocurrió por accionar del SR LOPEZ en su carácter de dependiente de la empresa sino fue una consecuencia de que que "el chapista que el contrato realizo mal los trabajos" lo cual ocurrió en virtud de "un arreglo que hizo con el SR JOSE OSVALDO SANCHEZ (novio de la actora) por fuera de la firma, con un chapista particular y que la empresa no tiene nada que ver". Con ello queda acreditado que el SR LOPEZ no actuo como dependiente de la empresa ni en ocasión de las funciones encomendadas sino en exceso de sus funciones y sin que exista un encargo de mi mandante a tal fin.-

Es decir quien causo el daño fue el chapista contratado por el SR LOPEZ, quien no tiene relación alguna con mi mandante.-

Como surge claramente del art. 1753 CCyC, para que el hecho del dependiente sea imputable al principal es preciso que se encuentren reunidos tres recaudos, a saber:

1. debe existir una relación de dependencia entre el dependiente y el principal;
2. el daño debe haber sido causado en ejercicio o en ocasión de la función; y
3. debe existir un hecho ilícito del subordinado.

Para imputar responsabilidad a mi mandante es preciso que exista una necesaria relación entre las tareas propias del subordinado y el daño producido.

La norma en análisis establece, en ese sentido, que el perjuicio debe haber sido ocasionado en ejercicio o con ocasión de la función del dependiente.

Enseña MOSSET ITURRASPE que "Es lógico que el comitente no responda de todo daño causado por su auxiliar, cualquiera sea la oportunidad o el medio. Como regla no responderá de los perjuicios ajenos a la función o tarea encomendada: los que se cumplan en el exclusivo beneficio del dependiente, fuera del horario y del lugar de trabajo, sin los medios proporcionados por el principal" (Codigo Civil Comentado, pag 330).-

Hay ejercicio de la función encomendada cuando el dependiente ejecuta el acto dañoso practicando el cargo recibido. En el caso sub-examen es evidente que el SR LOPEZ no actuó en ejercicio de su cargo ni en ocasión de sus funciones sino por su propia cuenta en razón de un "arreglo" con el novio de la actora siendo mi mandante totalmente ajeno a dicho acuerdo.

Todo ello, es ignorado por la sentenciante en su decisorio. Pido se tenga presente.

Tal nuestro segundo agravio.

3.-Tercer agravio. La sentencia atacada por esta via realiza una somera y superficial valoración de las pruebas producidas en autos que permiten arribar a conclusiones y a emitir un pronunciamiento que carece de toda lógica por cuanto realiza una valoración insostenible de la prueba instrumental y omite, de manera deliberada, analizar prueba esencial para la

resolución de la causa, dando como resultado un fallo fundado en afirmaciones y argumentos dogmáticos, con fundamento aparente.-

Ello es así por cuanto la SRA JUEZ A QUO funda su decisorio en una errónea interpretación del acta notarial acompañada por el actor al sostener que "De dicho instrumento surge que el 19/08/2019 a hs. 17:30 la escribana mencionada junto a la actora y al Sr. Cristian Miguel Esteban Ovejero (DNI 31.128.463) -mecánico chapista asesor de la Sra. Urueña- se trasladaron y constituyeron en la puerta de la concesionaria León Alperovich Group S.A. donde, en la puerta de la firma, entrevistaron al Sr. Eduardo López (DNI 35.257.624) quien afirmó ser asesor de Servicios de la Concesionaria León Alperovich Group S.A. y, al ser consultado acerca de los arreglos y reparaciones defectuosas del vehículo de propiedad de la actora, manifestó que el chapista que el contrato realizó mal los trabajos y que él se haría cargo de lo que falte hacer o se debe hacer de nuevo. Además, aclaró que compró los repuestos correspondientes en la concesionaria y que le extendería la factura correspondiente a la actora. Acto seguido, le preguntaron si el trabajo de reparación efectuado al vehículo tenía garantía de la concesionaria, debido a que la actora fue allí donde decidió recurrir y dejar su vehículo en el horario comercial de la firma, a lo que el Sr. López respondió que no, que fue un arreglo que hizo con el novio de ella, el Sr. José Osvaldo Sánchez, por fuera de la firma, con un chapista particular y que la empresa no tenía nada que ver.

Asimismo, se le preguntó si la Sra. Urueña le abonó la totalidad del dinero que figura en el presupuesto -que le exhibieron en original- y contestó que sí, que se canceló la totalidad de la suma de \$79.250 y que la firma que se encuentra estampada en el documento le pertenece. La notaria, dejó constancia de que el presupuesto emitido por el Sr. López tiene el membrete de la Concesionaria Oficial de León Alperovich Group S.A. con los siguientes datos: CUIT 30-70829831-6, fecha 8 de Enero de 2019, Shipton 1432 Concepción -Tucumán.

Del acta de constatación, también surge que el mismo día a hs. 18:15 -la escribana, la actora, el Sr. Ovejero y, ahora también, el Sr. López- se trasladaron y constituyeron en el taller mecánico del chapista que arregló el vehículo en cuestión, donde fueron atendidos por José Cabezas (DNI 22.186.625) quien dijo ser el mecánico a quien el Sr. López contrató para efectuar los arreglos y reparaciones al vehículo de la Sra. Urueña. A continuación, procedieron a mostrarle al Sr. Cabeza los

detalles y trabajos mal efectuados y este contestó que el detalle del presupuesto se equipara al precio de un repuesto nuevo o reparado, además comentó que fue poco el tiempo que tuvo para efectuar los arreglos porque tenía otros trabajos pendientes y es por eso que tuvo que hacer un arreglo precario y provisorio."

Claramente entendemos que existe una errónea interpretación del acta porque , conforme fue acreditado, en el caso de la actora, la unidad FORD KA ingreso una sola vez al taller de mi mandante, en fecha 6/5/2019 a los efectos de realizar el cambio de batería en garantía, es decir sin que la actora haya abonado suma alguna por tal servicio.

Mi mandante no registra en sus sistemas de gestión el ingreso de un vehículo a nombre de la demandante, que acredite otros trabajos que el detallado ut supra. NO SE PROBO QUE LA UNIDAD HAYA INGRESADO AL TALLER.

Mi mandante no celebró ningún acuerdo ni compromiso de reparación por un siniestro con la parte actora quien registra interaccion comercial con LEON ALPEROVICH GROUP, HOY AG NAUM a través de la compra de repuestos por mostrador.

De esta manera, AG NAUM S.A. acredito en autos que no fue contratado por la actora a los efectos de realizar las reparaciones mencionadas por la actora ni tampoco percibió suma alguna por los supuestos arreglos. Solamente fue atendida y se emitió un presupuesto conforme al acompañado por la actora, conforme surge del testimonio brindado por el SR FARALLE, que no fue debidamente considerado por la sentenciante.

Ello es corroborado por el acta notarial acompañada por la propia actora de fecha 19/8/2019 pasada por ante la ESCRIBANA NATALIA DELGADO CARMONA.

En dicho instrumento, cuando se le preguntó acerca de las reparaciones y arreglos, expresamente el SR LOPEZ manifestó que **"el chapista que él contrato realizo mal los trabajos y que él se hará cargo de lo que falte hacer o se deba hacer de nuevo"**. Incluso cuando la escribana actuante, a pedido de la requirente le pregunto si el trabajo realizado tenia la garantía del concesionario, el SR LOPEZ respondió que no, que fue un arreglo que hizo con el SR JOSE OSVALDO SANCHEZ (novio de la actora) **por fuera de la firma**, con un chapista particular y que la empresa no tiene nada que ver"

En consecuencia, mi mandante es totalmente ajeno al reclamo de la actora por cuanto la relación comercial se limitó a emitir un presupuesto de conformidad a la consulta realizada, pero no realizó trabajo de reparación alguna sobre la unidad de la actora.

No existe constancia alguna de ingreso de la unidad al taller a los efectos de que se realice reparación alguna por los daños invocados por la actora ni por ningún otro, salvo el reconocido expresamente por mi mandante que consistió en el cambio de batería.-

En consecuencia, por todos los fundamentos vertidos, corresponde se haga lugar a nuestro agravio.-

4.- Agravia a mi mandante la sentencia apelada en cuanto declara procedente los rubros de condena dispuestos y sus importes a saber:

-DAÑO MATERIAL: La sentencia declara procedente este rubro por la suma de \$79250.

La sentenciante hace lugar a la demanda sin que exista comprobante fehaciente de que esos montos hubieran ingresado al patrimonio de mi mandante. En autos la actora, teniendo los medios probatorios a su alcance, no realizó actividad probatoria alguna para acreditar que dichas sumas fueron percibidas por mi mandante. La firma del empleado, reconocida en un acta notarial no es prueba suficiente para acreditar que los montos fueron percibidos por AG NAUM S.A.

Enseña Pizarro que el daño patrimonial o económico “importa, necesariamente, un detrimento del patrimonio de la persona, como conjunto de valores económicos, susceptible de apreciación pecuniaria, para lo cual deben tomarse en consideración todas las circunstancias del caso concreto. El daño patrimonial produce una merma en el patrimonio del damnificado. Va de suyo que su indemnización, en términos de razonable equivalencia, luce orientada a recomponerlo” (cfr. Pizarro, Ramón D., El concepto de daño en el Código Civil y Comercial, publicado en: RCyS 2017-X, 13, cita Online: AR/DOC/2241/2017).

Por lo tanto, por los fundamentos vertidos, solicitamos se revoque la sentencia.

-PERDIDA DE VALOR VENAL

Agravia a mi mandante que la sentenciante, hace lugar este rubro sin que la actora haya producido prueba alguna sobre el monto reclamado. No existe en autos ninguna prueba producida por la actora que justifique cuantificación de este rubro.-

Se agravia mi mandante por cuanto la sentenciante ha suplido la negligencia probatoria de la actora por cuanto la SRA URUEÑA no arrimo elementos de juicio serios para acreditar el valor de la unidad a los efectos de cuantificar el rubro.

De esta manera, se agravia mi mandante cuando la SRA JUEZ A QUO considera el valor actualizado de la unidad y sobre ese monto realiza un calculo antojadizo del 10% aplicando, además, erróneamente intereses.

Tal agravio se justifica en que la sentenciante debió o bien tomar el valor histórico y calcular la pérdida del valor venal en base a dicho valor y sobre ese resultado aplicar intereses o bien tomar un monto actualizado como hizo, considerar un porcentaje de pérdida de valor venal pero sin aplicarle interés alguno.

Ello es así por cuanto, conforme fundaremos mas adelante, la aplicación de los intereses realizados en la resolución implica un desplazamiento patrimonial injustificado en favor de la SRA URUEÑA.-

-DAÑO MORAL

Se agravia mi mandante por cuanto la resolución atacada por esta vía declara la procedencia del rubro por la suma de \$820.000 mas intereses

El resarcimiento por daño moral está pensado para situaciones de una aflicción seria y no constituye un modo de engrosar la reparación del daño patrimonial, que, sin lugar a dudas, es la actitud que esta asumiendo el actor.-

El daño moral es una especie de agravio que involucra la violación de alguno de los derechos inherentes a la personalidad. Ahora bien, “no basta pedir la reparación del daño moral; no basta invocarlo. Las sentencias de nuestros Tribunales han subrayado que quien petitiona la indemnización debe brindar todos los elementos de juicio que permitan al juez convencerse acerca de su realidad. Y también debe probarlo... En ese orden de ideas la Corte Tucumana ha concluido que, al igual que el daño material, el daño moral debe ser “cierto” y su procedencia requiere condiciones mínimas para poder aceptar que el daño efectivamente se ha producido.”

(CSJTuc /4/07/94, “Escobar José c/ Provincia de Tucumán s/ contencioso administrativo).-

La indemnización busca reparar un daño sufrido, pero en ningún caso puede convertirse en una forma de lucro para el supuesto afectado, puesto que, en ese caso, estaríamos hablando de un enriquecimiento sin causa. Así lo único que se busca es un resarcimiento de los daños que hayan sido acreditados fehacientemente.

Entendemos que la suma fijada es arbitraria, por cuanto la cifra fijada carece de sustento factico y probatorio. La actora no aportó ningún tipo de prueba que de razón y fundamento sobre los cuales pueda apoyarse el pronunciamiento dictado. De esta manera, la SRA JUEZ A QUO se limita a fijar arbitrariamente el monto sin indicar ningún argumento concreto que justifique la procedencia de este rubro.-

De esta manera y siguiendo estos lineamientos, tenemos que decir que no existen elementos de convicción que permitan sostener, como erróneamente lo hace la SRA JUEZ A QUO, la existencia, y mucho menos posibiliten determinar la cuantía del daño moral que se reclama.-

“Es de hacer notar que la jurisprudencia local desde vieja data viene sosteniendo que la reparación del agravio moral tiene naturaleza indemnizatoria, reparadora y no sancionatoria o punitoria (esta Sala in re: "Quinteros c/Pintos" del 29/6/92 y "Gálvez c/Panamericana de Plásticos" del 09/9/92 y antecedentes que allí se citan). Como consecuencia de ello evidentemente este daño debe ser probado por el interesado y en autos no se ofrecieron pruebas tendientes a acreditar la existencia del mismo. A ello es de agregar que los daños materiales sufridos por el automóvil del demandante, por sí solo, no pueden derivar esta singular reparación porque no existe entre aquel y el actor un vínculo afectivo que el derecho proteja específicamente y cuya conculcación afecte el aspecto moral de la personalidad del accionante (Cf. CCCC Ia.Tuc. in re: "Gamboa c/Fernández y Cía." del 17/10/89). Las molestias, desagradados y la angustia sufridos por el propietario del automóvil chocado no constituyen agravio moral (CNCiv.Sala D, 25/3/74, LL 155-696; Sala F, 30/11/71, LL 149-571; Sala C, 08/4/76, LL 1976-C-163).” CAMARA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN Sala 3, SCARAVILLI LOPEZ ALBERTO DOMINGO Vs. BALTAZAR AMERICO GALVEZ S/DAÑOS Y PERJUICIOS.

Es así que solicitamos se revoque la procedencia de este rubro.-

5.- Agravia a mi mandante la aplicación de los intereses realizados por la SRA JUEZ A QUO en los distintos rubros declarados procedentes.-

En tal sentido, respecto del **daño material**, la sentenciante aplica la tasa activa desde la fecha del hecho hasta su efectivo pago.

Al respecto, el fallo dictado desconoce la jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMAN según la cual Debe desestimarse la procedencia de una tasa de interés bruto, que incluya la prima por depreciación de la moneda, pues de lo contrario se compensaría al acreedor doblemente por ese concepto, por vía de la valorización de la prestación adeudada y de la referida escoria incluida dentro de la tasa de interés puro' (2017:526). En términos similares se expide Federico Ossola para quien 'con relación a la tasa de interés aplicable no debe perderse de vista que si el daño se ha producido previo a la sentencia y el quantum del capital ha sido fijado tomando en cuenta los valores actuales al tiempo en que ella se dicta, no corresponderá que la tasa de interés por mora contenga escorias inflacionarias hasta ese momento' y por ello, 'añadir el componente inflacionario a la tasa de interés implicaría consagrar un enriquecimiento sin causa a favor de la víctima'

A su turno la CSJN en el precedente "Recurso de hecho deducido por Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima en la causa Alarcón, Gerardo Daniel c/ Sapienza, Walter Daniel y otros s/ Accidente - Ley Especial", del 27/2/2020 (Fallos, 343:124) si bien no se pronunció "sobre cuál es la tasa (pura) que debe aplicarse en el tiempo que se devenga entre el hecho y la cuantificación del perjuicio, lo que sí parece categóricamente decidido es que superponer la tasa activa con valores actualizados produce resultados inequitativos y arbitrarios. Y esto es una cuestión que no necesita ser probada, sino que se infiere in re ipsa de la mera adopción del equivocado criterio de retrotraer la tasa activa a la fecha del siniestro, sin distingo alguno y sin considerar el momento en que los daños han sido determinados". De ello se infiere que, al crédito reconocido a la actora, deberán añadirse moratorios del 8% anual desde la fecha del hecho 25/02/20210 hasta el 27/02/20, fecha en que el daño fue reconocido judicialmente, y desde allí hasta su efectivo pago, devengarán los intereses de tasa activa promedio mensual del Banco de la Nación Argentina Cito: "...En el sublite, el recurrente cuestiona la tasa del 8% c para cuantificar el interés moratorio pero "existe consenso en señalar que mientras la obligación sea de valor y no haya mutado su naturaleza a dineraria, por vía de la cuantificación en dinero que prevé el art. 772, debe aplicarse una tasa de interés puro,

que tradicionalmente ha sido estimada entre el seis y el ocho por ciento anual" (Pizarro, Ramón D., "Los intereses en el Código Civil y Comercial", LL 2017-D, 991); criterio al que el pronunciamiento recurrido luce ajustado (CSJT, sentencia N° 975 del 13/06/2019, "Nisoria Mario David vs. Argañaraz, Oscar Alberto y Otros s/Daños y perjuicios"; sentencia N° 506 del 16/04/2019, "Ávila Mercedes Nora vs. Fernández Elsa Amanda y Otros s/Daños y perjuicios"; sentencia N° 1487 del 16/10/2018, "Vargas Ramón Agustín vs. Robledo Walter Sebastián s/ Daños y perjuicios).

La sentenciante adopta el equivocado criterio retrotraer la tasa activa a la fecha del siniestro, sin distingo alguno y sin considerar el momento en que los daños han sido determinados.

Entendemos que a los créditos reconocido a la actora, en el supuesto hipotético de mantenerse, deberían añadirse moratorios del 6% anual desde la fecha del hecho hasta la fecha en que el daño fue reconocido judicialmente, y desde allí hasta su efectivo pago, devengar los intereses de tasa activa promedio mensual del Banco de la Nación Argentina.

Se agravia mi mandante, por cuanto en el rubro perdida del valor venal, la sentenciante tomar valores actualizados y en forma erronea ademas le aplica intereses.

Entendemos que tal circunstancia, la actualizacion de los valores y ademas la aplicación de los intereses decidida por la SRA JUEZ A QUO consituyen un desplazamiento patrimonial injustificado, ya que se estaría computando dos veces el componente "desvalorización" o "depreciación" monetaria que integra las tasas bancarias: una, en oportunidad de fijar montos en la sentencia -cristalización-; y otra, a partir de ese momento y hasta el efectivo pago (cfr. CCC Concepción, Sala I, sentencia n° 15 del 14/2/2017) con la aplicación de los intereses.-

Respecto del rubro daño moral, la sentenciante toma un valor actualizado distinto al reclamado, es decir actualiza el monto de condena y ademas le aplica intereses.- De la misma manera, entendemos que tal razonamiento implica, tambien en este caso un desplazamiento patrimonial injustificado, ya que se estaría computando dos veces el componente "desvalorización" o "depreciación" monetaria que integra las tasas bancarias: una, en oportunidad de fijar montos en la sentencia -cristalización- con la actualizacion del monto de condena; y otra, a partir de ese

momento y hasta el efectivo pago (cfr. CCC Concepción, Sala I, sentencia n° 15 del 14/2/2017) con la aplicación de los intereses.-

Tal nuestro quinto agravio.-

9.-PETITORIO:-

Por lo expuesto de V.S. pido.-

1.- Tenga por interpuesto recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en fecha 27/12/2023.

2.-Oportunamente, se resuelva la procedencia del recurso de apelación intentado, con expresa imposición de costas.

.

JUSTICIA.